

Norte

abril 19

①

~~Miguel Ángel Granados Chapa~~

miguel ángel granados chapa

Oaxaca,

Procedentes de Chiapas, ~~Veracruz, Tabasco~~ y Jalisco, ~~cinc~~ cuahro

marchas caminan hoy hacia el centro del país. Otra más fue interrumpida en las goteras de la ciudad de México el martes 17 de marzo. Una séptima tuvo dimensión local, en San Luis Potosí. Son instrumentos de protesta política y social. Junto con plantones y estrangulamientos de carreteras, forman el arsenal de la resistencia civil, utilizado por partidos y agrupaciones del talante más diverso.

El antecedente más inmediato de las movilizaciones de hoy fue exitoso. Eso explica su multiplicación. El año pasado, a fines de septiembre, el doctor Salvador Nava inició su Marcha de la dignidad y la democracia. La intención era caminar de San Luis Potosí al Distrito Federal, y se detuvo en las cercanías de Querétaro. Su propósito, derribar al espurio gobernador Fausto Zapata, fue conseguido el 9 de octubre. Mucho más larga fue la trayectoria del Exodus para la democracia, emprendido el 21 de noviembre por Andrés Manuel López Obrador, en protesta por ilegalidades electorales en Tabasco. Se le sumaron inconformes, de la misma bandera, en Veracruz. Llegó a la ciudad de México el 11 de enero de este

(A)

año, y como resultado de ella se modificaron los resultados en cinco municipios, de las dos entidades.

Las que ahora están en curso son las siguientes:

El dos de marzo se inició en Tepatitlán, en Los Altos, la Marcha por la Democracia en Jalisco, llamada también Cruzada por la Dignidad de ese estado. Sus integrantes son miembros del Partido de Acción Nacional, que protestan por serias irregularidades electorales en los comicios del 9 de febrero. Aunque se ha reconocido ya el triunfo panista en 15 municipios, los marchistas quieren que se revise la situación en otros tantos, donde alegan victorias o denuncian fraudes.

"Queremos comentar ante ustedes, ciudadanos --dijeron en una comunicación pública--, que es una tristeza que los gobiernos del sistema revolucionario no quieran entender las necesidades de un pueblo, y en especial el pueblo nuestro, donde ha reinado el caciquismo y el influentismo económico, y no sólo eso, sino también se están violando las leyes estatales y en lo electoral, si bien sabemos existen sanciones para aquellos que cometan fraude contra el voto ciudadano, no existe quién lo castigue. Nosotros preguntamos a la ciudadanía: ¿acaso es el pueblo el que organiza los fraudes electorales y no aquéllos que tienen el control del padrón? Si el Consejo Electoral del estado no es responsable de estos fraudes, entonces le decimos al C. Lic. Carlos Salinas de Gortari que responda por el pueblo y haga esclarecer honesta y eficientemente quiénes son responsables

y se les castigue con todo el rigor de la ley, porque el pueblo no soporta más burlas".

Rumbo a su destino, en Querétaro, los marchistas blanquiazules se reunieron el jueves 19 con el gobernador Guillermo Cosío Vidaurri. Este concurría a un evento hidráulico, en esa ciudad, y los recibió acaso para evitar que llegaran a la capital federal. Fue un intento mutuo, e inútil.

El cuatro de marzo comenzó la marcha, desde distintos puntos del norte y el centro del país, de la Coordinadora Nacional por la Legalidad. Paradójicamente, sus miembros estaban acusados de practicar la introducción ilegal de vehículos desde los Estados Unidos a México. Por diversas razones, los marchistas eran algunos de los miles de tenedores de automóviles que no habían sido regularizados en la reciente campaña fiscal ex profeso, y buscaban nuevos plazos y condiciones para hacerlo. Dirigidos por el chihuahuense Luis Aguilar, tocayo de *El gallo giro*, y del magnate importador que hace no mucho tiempo conoció los rigores penales de la fiscalidad, este nuevo Aguilar sufrió una suerte semejante. En una sola semana, padeció tres percances. Por un lado, su marcha debió detenerse porque contribuía, al yugular el tránsito en la atestada carretera de Querétaro a la ciudad de México, a que crecieran los niveles de contaminación que precisamente el lunes 16 llegaron a sus cotas máximas (antes de las conocidas el fin de semana siguiente). La movilización se había congelado,

primero por decisión de sus integrantes, ante el problema ambiental, pero luego fue lanzado contra ella un operativo principalmente a cargo de la Policía Federal de Caminos y Puertos, que con perros (unos con trailla) disuadió a los caminantes de recorrer el último tramo de su trayecto. En segundo lugar, la secretaría de Hacienda reiteró la ya conocida e insistente negativa a ofrecer nuevas oportunidades de regularización. Y en tercer lugar, fue detenido, con desproporcionado despliegue de fuerza, sin exhibir orden de aprehensión y llevado a Chihuahua, donde se le instauró un proceso de tal peculiaridad, que Aguilar mismo se consideró preso político a causa del terrotismo fiscal. Ocurre que en una fecha tan lejana como el siete de enero, Aguilar y otros muchos propietarios de coches ilegales retuvieron en sus oficinas a funcionarios aduanales y de otras áreas hacendarias para forzar una negociación sobre la estancia de esos vehículos en suelo mexicano. Ahora resulta que se les procesa por eso, bajo acusaciones de privación ilegal de la libertad, amotinamiento y ataques a las vías generales de comunicación.

El siete de marzo marcó el primer paso de la caminata llamada *Xi Nich*, Marcha por la Paz y los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Nació en Palenque y su destino es, como otras hazañas de andariegos, la capital de la República. Su propósito es poner de manifiesto la dureza con que se aplica contra los indios la ley en Chiapas, donde el gobernador no vacila en meter a la cárcel aun a los

funcionarios federales --como los del INI recientemente presos-- que se ponen de parte de las etnias explotadas. La marcha siguió a un plantón de 71 días, iniciado por la prisión de varios dirigentes indios.

Al pasar por Cárdenas, en Tabasco, cuyo gobernante, Carlos Wilson, puede ejercer el mando como resultado del Exodus por la Democracia, el político perredista consideró que la marcha india, comparada con el Exodus, "es más humana, es un reclamo de los derechos de los más humildes que luchan contra el autoritarismo".

Las peticiones de la Marcha están contenidas en un programa de 22 puntos, que incluyen "acabar con el acoso a las comunidades indígenas, con la corrupción imperante en los juzgados, dar solución a los conflictos agrarios y recibir apoyo para concluir obras iniciadas el año pasado". El gobierno chiapaneco insistió en que estaba dispuesto al diálogo, si bien no dejó de minusvaluar a la Marcha: "En Palenque, Salto del Agua y Chillón se asientan 171 mil 436 habitantes, por lo que una marcha de 211 indígenas, que merece todo el respeto, de ninguna manera representa el sentir de una población que reconoce la positiva labor del gobierno frente a rezagos que han colocado a Chiapas en los últimos indicadores del desarrollo nacional".

El problema indígena chiapaneco es complicado. Una de sus manifestaciones consiste en privilegiar a los lacandones, una etnia entre varias, con perjuicio de tzeltalez, choles y zoques. En Ocosingo, por ejemplo, el gobierno estatal

favorece las pretensiones agrarias de 66 familias lacandonas contra las necesidades de más de cuatrocientas de otros grupos indios. No es ilegítimo, por supuesto, que aquéllos satisfagan sus derechos. Sí lo es que se les utilice para castigar a etnias que se han manifestado renuentes a ser manipuladas.

Casi simultáneamente, aunque por ruta diversa, salieron de Tuxtla Gutiérrez otros marchistas. Estos son maestros pertenecientes a la sección siete del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se trata de una de las dos secciones chiapanecas (la otra, la cuarenta, está formada por los maestros estatales), y está surcada por un conflicto interno, en que el grupo más radical, reducido a la minoría, se propone recuperar la capacidad de dirección de que dispuso en el pasado reciente. Este Exodus por la Democratización Magisterial trata de conseguir la convocatoria a un nuevo congreso seccional, y la renuncia de los actuales dirigentes. A diferencia de la marcha indígena, que salió hacia Tabasco y Veracruz, la magisterial eligió el camino de Oaxaca, y en Juchitán fueron bienvenidos por las fuerzas locales de su filiación. Luego atravesaron el istmo para entrar en suelo veracruzano y coincidir allí con la caminada india, y con la marcha "contra la violencia" protagonizada por la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP).

Esta, a su vez, partió de Tuxtepec el 9 de marzo. Su destino es también la ciudad de México. El objetivo de la movilización, según el dirigente de la UGOCP en la cuenca del

Papaloapan, es "el cese a la violencia y al asesinato de dirigentes políticos independientes", así como demandar la libertad de 25 presos pertenecientes a esa agrupación --tan controvertida que se la acusa de propiciar la violencia que denuncian, no sólo con las armas sino mediante la ocupación ilegal de tierras-- y la anulación de unas cuatrocientas órdenes de aprehensión giradas en Veracruz y Oaxaca contra miembros suyos. En particular lastima a la UGOCP la impunidad que beneficia a los asesinos de Héctor Montes Parra, hermano de Margarito de los mismos apellidos, dirigente de esa organización.

El 15 de marzo, en fin, la candidata del Partido de la Revolución Democrática a la alcaldía de Lagunillas, San Luis Potosí, María Pueblito Colunga, empezó una marcha de ese lugar a la capital potosina, que concluiría dos días después. Su acción se propuso, sin éxito, conseguir la anulación de las elecciones municipales extraordinarias celebradas el primero de marzo.

Como se aprecia en este panorama, que no incluye la multitud de caminatas en la ciudad de México y otras capitales importantes, el uso de este instrumento ha proliferado. Se entiende que así sea, porque aparte de su eficacia permite la realización de varios objetivos. Proporciona una dimensión mayor a problemas puramente locales, o va dando cuenta de las diversas manifestaciones de un mismo conflicto a lo largo del trayecto. Suscita solidaridades, aun de personas y grupos no afectados

directamente, y enlaza a núcleos distantes de una misma agrupación. Genera presiones sobre gobernantes reticentes a dialogar, negociar o resolver. Y si no se dirimen las cuestiones en forma favorable a los solicitantes, se hace patente la naturaleza de un litigio político o social.

Marcha, marcha, que algo queda.